

“España, a escasas semanas de las elecciones, ha entrado en un camino sin retorno. Por supuesto, los nostálgicos del pasado, los que se oponen al pluralismo sindical y político, están aún activos. Y son peligrosos. Pero el Estado franquista está ya en trance de desaparición. El problema ya no consiste en saber si es posible la democracia. En el momento en que Francia e Italia, dos naciones latinas y mediterráneas, buscan una nueva forma de sociedad, lo que importa saber es hacia qué tipo de democracia se encaminará España.”

E. Bailby



¿España Hacia la Democracia?

Edouard Bailby

Edouard Bailby ¿ESPAÑA HACIA LA DEMOCRACIA?

Argos Vergara

INDICE

I. El asesinato del almirante	7
II. La ascensión de Arias Navarro	19
III. Los tecnócratas del Opus	29
IV. El heredero de Franco	41
V. La apertura de 1974	59
VI. Las Comisiones Obreras	77
VII. La hoz y el agua bendita	95
VIII. ¡Descansen, armas!	115
IX. La derecha civilizada	131
X. La izquierda indecisa	151
XI. El final del Caudillo	163
XII. El rey, bloqueado	181
XIII. La bomba perdida	199
XIV. La España o las Españas	209
XV. Zigzags hacia la democracia	223
Epílogo	233

Título de la edición original:
«ESPAGNE VERS LA DÉMOCRATIE»

publicada por
ÉDITIONS GALLIMARD, París

Traducción
Enrique Sordo

Sobrecubierta
Carlos Rolando

Primera edición: abril 1977

© Éditions Gallimard, 1976
© Librería Editorial Argos, S. A., 1977
Aragón, 390, Barcelona-13 (España)

ISBN: 84-7017-336-7

Depósito Legal: B. 15.337-1977

Impreso en España - Printed in Spain
Impreso por Chimenos, S. A., Carretera Nacional 1952, Km. 26,
Coll de la Manya, Granollers (Barcelona)

CAPÍTULO PRIMERO

EL ASESINATO DEL ALMIRANTE

Llueve en Madrid el jueves 20 de diciembre de 1973. Ante la puerta del Tribunal de Orden Público, en el interior del Palacio de Justicia, periodistas y observadores extranjeros esperan en vano la autorización para entrar. En la calle, bajo la vigilancia de la policía, cuatrocientos o quinientos españoles hacen cola con la esperanza de poder asistir al proceso 1001. Van a ser juzgados un cura y nueve sindicalistas de las Comisiones Obreras — la principal organización semiclandestina de los trabajadores —, cuyo líder es Marcelino Camacho. Éste, que ya ha pasado quince años de su vida en la cárcel, es el sindicalista más popular de España, uno de los pocos que, pese a la censura de los medios de información, es conocido en todo el país. Detenidos en 1972, en un convento de las cercanías de Madrid, estos diez hombres están acusados de «asociación ilícita» y de «mala conducta social». En la España del general Franco esto es un «crimen» que se castiga con veinte años de prisión.

Yo había llegado cuatro días antes a la capital para «cubrir el proceso» y un abogado relacionado con la defensa me había asegurado que me conseguiría la entrada en la sala del tribunal. Normalmente, sólo algunos corresponsales permanentes de la Prensa extranjera, acreditados ante el Gobierno, estaban provistos de una autorización que les permitía asistir a los procesos. Pero, a pesar de las dificultades que presentaba la empresa, el caso era demasiado importante para no probar suerte. Aunque estábamos en plena crisis de Oriente Medio, no había que echar en olvido a los diez reclusos de la prisión de Carabanchel, la Bastilla del régimen franquista.

cargó, con el mayor secreto, la construcción de su sepulcro. Sólo fueron informados de ello los familiares más próximos y unos pocos fieles. En España, el lugar donde debería ser sepultado el Caudillo estuvo siempre rodeado de misterio y siguió estándolo hasta los días que precedieron a su muerte. Algunos afirmaban que sería enterrado en la basílica del Valle de los Caídos, donde están reunidos los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, y de setenta mil combatientes muertos durante la guerra civil. Otros aseguraban que sería enterrado en la cripta de El Escorial, donde reposa la casi totalidad de los reyes de España. El general Franco, católico ferviente, deseaba, igual que Salazar, De Gaulle y Adenauer — tres estadistas a los que él admiró confusamente — reposar en un cementerio campesino. Yo investigué durante dieciocho meses para tratar de descubrir la verdad. «Alguien incluso ha tomado fotos de la cripta», me confió un amigo.

En junio de 1973, seguro de mis informaciones, me trasladé en coche a una colina cubierta de robles, entre los cuales corría de vez en cuando un ciervo, situada a dos kilómetros de El Pardo. Dos sepulcros se disponían a trabajar en torno de las tumbas donde yacen algunos personajes del régimen. Entre ellos, bajo una losa muy sencilla, el general Camilo Alonso Vega, muerto en 1971. Otros — como el almirante Carrero Blanco, que sería enterrado allí seis meses después —, tienen el nombre de su familia grabado en unos panteones. Frente a un roble centenario — el propio general Franco pidió que no fuese abatido —, una capilla de piedra de sillería gris, totalmente nueva. En su interior, una cripta. En el centro, una losa de casi dos metros de longitud, virgen de inscripciones: la del Caudillo. Desde la construcción de la capilla, en 1970-1971, las normas disponían que la verja estuviese cerrada y el lugar prohibido al público. En el mayor secreto, el general Franco había visitado el lugar en 1972.

Pero no iba a ser enterrado allí. Contrariando sus últimas voluntades, los «ultras» convirtieron sus funerales del Valle de los Caídos en un desquite.

LOS TECNÓCRATAS DEL OPUS

Ni monjes ni soldados: son los tecnócratas de Cristo, los discípulos del padre José María Escrivá de Balaguer que, en 1928, fundó una orden envuelta en misterio, el Opus Dei. *La Obra*, como simplemente suele ser llamada en España.

Su poder político ha sido considerable a partir de los años sesenta. Tan considerable, que es imposible comprender la España de hoy sin referirse a ellos. Reunidos en torno a Laureano López Rodó, se han infiltrado poco a poco, como un ejército invisible, en todos los engranajes de la administración. Eficaces, solidarios unos con otros, pero inaprensibles a los ojos de la opinión pública, fueron ellos quienes accionaron el mecanismo de la arrancada económica del país: la famosa «revolución de los 600», de los pequeños coches utilitarios Seat. Y quienes presentaron en los medios dirigentes de Occidente los créditos de la tesis del crepúsculo de las ideologías. Dejando intencionadamente que planease la duda sobre el verdadero papel del Opus Dei, quisieron demostrar que el desarrollo económico de la España franquista conduciría inevitablemente a una democratización realizada desde arriba. Detrás de ese biombo, eran las altas finanzas internacionales quienes intervenían con el fin de preparar a España para la sucesión del Caudillo.

En esta operación hubo un hombre que desempeñó un papel de primer orden: López Rodó. Profesor de Derecho, miembro «numerario» del Opus Dei, entró discretamente, durante el año 1956, en la secretaría general técnica de la Presidencia del Gobierno, desde la cual participó en el ordenamiento de la eco-

nomía española. Ministro del Plan de Desarrollo desde julio de 1965 y acreditado desde entonces como el principal artífice de la recuperación del país, supo tejer hábilmente sus estrechos lazos con el almirante Carrero Blanco. Ambicioso, partidario del autoritarismo bajo apariencias liberales, tuvo la habilidad de convencer a Franco para que nombrase, en julio de 1969, al príncipe Juan Carlos su sucesor —después de su muerte— a título de rey. Intervención cuidadosamente preparada por el almirante Carrero Blanco. Esto le permitió acceder al poder el 29 de octubre de 1969. Alejandro del Gobierno a los miembros de Falange para reemplazarlos por personajes del Opus Dei, López Rodó se rodeó de jóvenes colaboradores que no habían vivido la guerra civil y que se movían con un mismo objetivo: poner fin a treinta años de autarquía, desatracar a España del malecón franquista para amarrarla a la Europa del Mercado Común. Sin concesiones políticas verdaderas.

La humildad cristiana obligó a López Rodó a disimular su victoria bajo el velo de la inocencia. Allí donde la opinión creyó ver el resultado de una conspiración proseguida con tenacidad por maquiavélicos devotos, él sólo advirtió la colocación en su sitio de unas competencias beneficiosas para el Estado. «¿Qué relación puede haber — me dijo él en aquella ocasión — entre la reorganización ministerial y el hecho de que yo vaya a misa todas las mañanas porque soy miembro del Opus Dei?» Aparentemente ninguna. Pero el público madrileño respondió a la pregunta del ministro aplaudiendo cada noche, en el Teatro de la Comedia, una versión de *Tartufo* adaptada a los gustos actuales. Raúl Morodo, abogado y profesor de la Universidad de Madrid, socialista próximo al profesor Tierno Galván y personalidad ascendente de la nueva generación, me arrastró a verla con un placer evidente. Convertida en una «obra de actualidad», la sombría comedia de Molière tuvo el don de entusiasmar a los enemigos del Opus y nadie se equivocó en cuanto a sus alusiones más que directas a éste. Menos aún los doscientos falangistas que, en la mañana de la reorganización ministerial, es decir, el

29 de octubre, se manifestaron por las calles de la capital al grito de «¡Falange, sí; Opus, no!» Era la primera vez que *la Obra* era protestada en la plaza pública, excepción hecha de la Universidad, donde los estudiantes habían comprendido hacía mucho tiempo con quién tenían que habérselas.

Fundado por Escrivá de Balaguer para poner en jaque la influencia de los jesuitas en España, el Opus Dei, desde su creación, pretendió ser una vanguardia de cristianos ejemplares cuya acción debía desarrollarse en dos planos: el del éxito profesional y el del proselitismo ilustrado. Nadie se adhiere al Opus; se solicita y *la Obra*, por cooptación, decide. Y, lo más a menudo, en función de la posición que se ocupa o del talento que se os atribuye. Obligados por el triple voto de castidad, pobreza y obediencia, parece ser que los militantes de la Orden se rinden de buen grado, si no a la atracción del dinero, sí al menos al «snobismo» de las altas relaciones. Hay muchos en los círculos de los negocios y de la industria. En realidad, nadie ha sabido nunca cuáles eran los recursos de esta masonería, ni su estado financiero. Pero son considerables, gracias a la posición que algunos de sus miembros ocupan al frente de los Bancos o de las empresas inmobiliarias. Divididos en varias categorías — numerarios, oblatos, supernumerarios, cooperadores —, los miembros del Opus Dei forman en España un pequeño ejército de veinte mil hombres, de un total de cincuenta mil que hay en el mundo entero, repartidos principalmente por Portugal, Chile y Venezuela. Periódicamente se reúnen en sus casas de retiro. En Madrid hay una docena de ellas. Los toreros tienen la suya en el sur del país.

¿Representa el Opus Dei una fuerza internacional, el estado mayor de un catolicismo moderno resuelto a salvaguardar las estructuras capitalistas de los peligros de la subversión? «La campaña lanzada contra nosotros es escandalosa y ridícula — responde con irritación Javier Ayesta, jefe del servicio de Prensa de la organización —; no formamos ni una secta ni un partido político. Somos unos cristianos afanosos de libertades.» En Madrid, tras la fachada de ladrillo

rojo de un chalet de dos pisos, en salas sumidas en una penumbra propicia a la meditación, Ayesta y sus colaboradores han pasado sus días, desde hace años, ocupados en refutar, suavizar y matizar los juicios emitidos sobre *la Obra*. He tenido ocasión, varias veces, de discutir con este antiguo alumno de los jesuitas. Cierta día recorrimos durante tres horas los magníficos jardines del Retiro, creados en el siglo xv, con la mutua esperanza de clarificar algunos puntos oscuros. Ayesta se afaná, con mil rodeos, en hacerme admitir que el Opus no tenía más dedicación que la de Dios, y añadió que sólo era una pura coincidencia el hecho de que tantos altos funcionarios formasen parte de él. Yo hubiera deseado creer en su buena fe. Pero Ayesta tenía una concepción tal de la libertad que acabé por ponerme en contra. «Admito sin esfuerzo — me explicó — que dos miembros del Opus Dei puedan combatir desde ambos lados de una misma barricada: uno de ellos, en el lado fascista, y el otro, en el lado demócrata. Lo esencial es que hayan hecho su elección con toda libertad de conciencia.» ¿Con qué fin?

«Obedeced, porque estáis seguros que nunca se os exigirá una cosa que no sirva enteramente para gloria de Dios.» Este imperativo, que figura en el código de comportamiento moral de la Orden, ha inspirado unas realizaciones materiales nada desdeñables. En Madrid, el Opus Dei ha construido una docena de centros de enseñanza técnica. El más moderno de ellos es el de Tajamar, en el barrio obrero de Vallecas. No obstante, el más bello florón de la organización sigue siendo la Universidad de Navarra, en Pamplona. Fundada en 1952, primera universidad privada de España desde la guerra civil, ha sido concebida, de acuerdo con modernos métodos, para dar a sus casi seis mil estudiantes una formación «sui generis». «Aquí no hay discriminación política o religiosa — me afirmó el P. Carlos Soria —. Una libertad absoluta da a los estudiantes el sentido de sus responsabilidades y les prepara para su papel de futuros dirigentes del país.» Liberados, evidentemente, de toda ideología perniciosa.

El momento más crítico de la operación montada por López Rodó se situó en el mes de agosto de 1969. El Opus Dei acababa de obtener un éxito táctico al imponer, contra el sentir de la Falange, la designación de Juan Carlos como Príncipe de España y sucesor del general Franco. Los falangistas, entonces, se vengaron haciendo estallar el escándalo del asunto Matesa, importante empresa textil que había recibido, gracias a la complacencia de los ministerios económicos, en manos del Opus Dei, unos nueve mil seiscientos millones de pesetas de créditos por exportaciones muy dudosas. El hecho de que las sacudidas del escándalo, uno de los más graves del régimen, no arrastrasen a López Rodó y a sus amigos, basta para comprobar que, antes de acceder al poder visible, ya tenían otro. No solamente quedaron al margen, sino que supieron precipitar de su pedestal a José Solís Ruiz, ministro del Movimiento, hombre intocable, haciendo presentar tres mil enmiendas a su proyecto de nueva ley sindical — tan poco democrática como la precedente — en el instante en que ésta fue enviada a las Cortes. Y apartar, en igual ocasión, a Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores desde 1957, y a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo desde 1962. Quince días antes de la reorganización ministerial, «S.P.», órgano de los falangistas de centro-izquierda, hizo un último intento para interceptar el camino a los hombres de López Rodó. «¿El Opus Dei fuera de la ley?», tituló la revista, que hizo figurar discretamente en una esquina de la cubierta la minúscula cruz amarilla, símbolo de una milicia de nuevo estilo que, en definitiva, nunca ha sido otra cosa que la versión moderna del clericalismo histórico español.

«Tú has nacido para ser jefe. Entre nosotros no hay lugar para los tibios», había escrito Escrivá de Balaguer en *Camino*, colección de preceptos publicada en 1939 y de la que se han vendido tres millones de ejemplares. López Rodó no ha tenido nunca un alma de jefe. Pero tiene ambición. Vestido sobriamente, distinguido, este hijo de un industrial catalán, soltero empedernido, ha aprendido en las pistas

de tenis a combinar la ligereza con la resistencia. Enemigo del verbalismo, prefiere siempre el secreto de su despacho, situado en un viejo palacio particular del siglo XIX, en el cual el almirante Carrero Blanco asistía a reuniones públicas y mítines. Allí fue donde me recibió López Rodó, apenas una hora antes del anuncio oficial del nuevo gabinete ministerial, en octubre de 1969. Ya me había concedido una entrevista dos años antes. Y yo conservaba el recuerdo de un hombre mesurado en sus gestos y en sus palabras, muy escasas, que procuraba que apareciese en su mirada una llama secreta, un fuego interior que me hacía sentirme incómodo. Alrededor de su persona, los efluvios de un obispo.

Mientras hablamos, suena el teléfono. López Rodó se levanta y pone negligentemente ante mí la lista de los nuevos ministros de manera que me sea posible echarle una ojeada. Todavía no es oficial. Tengo tiempo de comprobar que el Opus Dei entra con fuerza en el Gobierno, lo cual me permite orientar la conversación hacia *la Obra*. Con prudencia. La víspera, durante un almuerzo en el Bajamar — restaurante de lujo madrileño, el preferido de los notables de la organización —, uno de los colaboradores de López Rodó me había precisado que éste se sentía profundamente «molesto» ante cualquier pregunta relativa a su vida personal y al Opus Dei. «Pero — había añadido, haciéndome pagar la mitad de la cuenta y metiéndose en el bolsillo la nota — como actualmente es un tema del día y usted parece interesarse por él, trataré de prepararle para sus preguntas y de hacerle saber que no es ése el objetivo de la entrevista.» López Rodó se esforzó en ser cortés. En pocas palabras, aceptó — hecho extremadamente raro en él delante de un periodista — hablarme de sus sentimientos religiosos. Y de las exigencias cotidianas del Opus Dei, que él definió en los mismos términos que Escrivá. «Me ruboriza — añadió, bajando los ojos — tener que hablarle de cosas privadas.» Me dijo esto como una muchacha que se desnuda delante de un desconocido. Pasamos entonces a problemas más importantes.

«El cambio de Gobierno que se produce hoy — me declaró López Rodó, arrellanándose en su butacón de terciopelo — representa una etapa fundamental en la Historia de España...» Debí de poner cara de sorpresa, porque añadió en seguida: «No en el campo de la política interior, sino en el de la política exterior. Después de los años de autarquía y aislamiento, España está decidida a acelerar su proceso de integración en los grandes grupos supranacionales. Esta política es una consecuencia natural de las necesidades de nuestro desarrollo económico.» Si creíamos en sus palabras, España estaba dispuesta a aceptar las principales disposiciones del Tratado de Roma y, por tanto, a establecer unas instituciones democráticas para entrar en el Mercado Común. López Rodó, que me lanzó una mirada socarrona por encima de sus gafas, añadió: «Esta nueva política se manifestará con un acercamiento a los países miembros de la Comunidad Económica Europea, una distensión de nuestras relaciones con la Gran Bretaña y una mayor amistad con los Estados Unidos. El nuevo Gobierno, ante todo europeo, trazará su política exterior alrededor de estos tres ejes.» Le pregunté si esta voluntad de integración tendría repercusiones sobre la liberalización interior — la «normalización», prefería decir Fraga Iribarne. La respuesta fue evasiva: «El desarrollo económico, en España como en todas partes, es la llave del desarrollo político.»

El reportaje sobre el Opus Dei que publiqué unos días más tarde en *L'Express* fue prohibido en España. Pero las declaraciones del ministro del Plan de Desarrollo convertido por su influencia en el n.º 3 del régimen, que acompañaban al reportaje en un recuadro aparte, fueron abundantemente citadas y comentadas en la Prensa. La censura, en Madrid, nunca se ha preocupado por las contradicciones. En este caso concreto, era evidente que el nuevo Gobierno quería subrayar su deseo de mejorar las relaciones con la Europa occidental. Las mantenidas con los Estados Unidos tropezaban con la instalación de las bases militares norteamericanas en España. En cuanto a Gibraltar, el callejón sin salida era total desde que la

frontera había sido cerrada. Londres, sensible a las declaraciones de López Rodó, llamó inmediatamente, para consulta, a su embajador en Madrid y al gobernador del Peñón. Sin demasiadas ilusiones. Franquistas y antifranquistas siempre han estado de acuerdo, aunque sin conceder al asunto igual prioridad, en que la presencia colonialista de la Gran Bretaña en una parcela de la Península Ibérica es injustificable. Laboristas y conservadores, por su parte, siempre han considerado que no se devolvería Gibraltar a España mientras Franco viviese. Dos posiciones inconciliables.

«Yo no siento ninguna afinidad con López Rodó.» Antonio Fontán, miembro del Opus Dei desde su juventud, rector de la Universidad de Navarra desde los años sesenta y, después, director del diario *Madrid*, no ocultaba su oposición a la dictadura. «Los que pretenden que el Opus Dei es un partido político —repetía— incurren en calumnia. Yo me adherí a él porque consideré que era una manera moderna y profundamente sincera de ser católico. Y pueden creerme: nunca he recibido instrucciones de mis superiores de la Orden para redactar mis editoriales.» En realidad, el pequeño equipo de periodistas reunidos entorno a Fontán daba pruebas de un valor y de una honestidad en la información que le acarrearón rápidamente las fulminaciones del almirante Carrero Blanco. Convertido en uno de los principales diarios de la tarde de la capital madrileña, *Madrid* era el único periódico de la época que se permitía hablar de las huelgas y explicar sus orígenes, y que no dudaba en publicar los nombres de los dirigentes sindicalistas encarcelados. «¿Cómo se las arregla?», le pregunté a Fontán, siempre dispuesto a dedicarme unos minutos para hacerme penetrar en los meandros de la política oficial, que él tan bien conocía. «La censura previa no existe ya —respondió—. Cada director de periódico debe cargar con el riesgo. Por tanto, basta con atreverse, con forzar muy suavemente los tabúes y las prohibiciones.»

Para seguir esta política, que le enfrentaba con los dignatarios del Opus Dei, Fontán no sólo contaba

con sus colaboradores, sino que tenía el apoyo del principal accionista del periódico, Rafael Calvo Serer, también miembro del Opus Dei. Este antiguo falangista exaltado, que pretendió «españolizar» a Europa poco después de la guerra para salvarla del liberalismo, consejero privado de don Juan —padre del príncipe Juan Carlos—, se había convertido a las ideas democráticas en los años sesenta. No obstante, mantenía cordiales relaciones con algunas personalidades del régimen e incluso tuteaba al almirante Carrero Blanco. Lo mismo que Fontán, se declaraba socialdemócrata. Le conocí poco tiempo antes del viaje de Jean-Jacques Servan-Schreiber a España, en las primeras semanas del año 1968. El director de *L'Express*, con ocasión del lanzamiento de su libro *El desafío americano*, quería pronunciar una serie de conferencias en Barcelona y en Madrid. Me pidió que le organizase su estancia en la capital española. Empresa difícil. Yo sabía que toda la izquierda se mostraría reticente a recibir a un hombre cuyas opciones ideológicas le parecían ambiguas. Y no era cosa, por otra parte, de acudir a los responsables del *establishment* para garantizar aquella iniciativa. Me contenté con informar a Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, de nuestros proyectos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Toda reunión pública en la que hubiese más de diecinueve personas necesitaba un permiso de las autoridades. Además, en la España del general Franco, las salas públicas pertenecían bien al régimen, bien a las instituciones privadas que le sostenían. Única excepción: la Universidad, donde los decanos gozaban de una relativa autonomía. Pero en ésta, los estudiantes, ferozmente hostiles a J.J. S.-S. —«jota punto jota punto, ese punto ese punto», para usar su fórmula favorita— sólo estaban dispuestos a recibirle y a escucharle para organizar una espectacular manifestación antifranquista. Ésta tuvo efecto, el último día, en la Facultad de Derecho, con una abundancia de banderas rojas que nunca se había visto antes en Madrid.

Resuelto, a pesar de todo, a que se hiciesen realidad los proyectos de Jean-Jacques Servan-Schrei-

ber, pues me parecía importante descubrirle España a un político francés de su renombre, hice partícipe de mis preocupaciones a José Antonio Novais, corresponsal permanente de *Le Monde* y plataforma giratoria de la Prensa mundial en Madrid. Después de haber pesado los pros y los contras, decidimos finalmente confiar la organización de la estancia a Antonio García Trevijano, amigo de Fontán y de Calvo Serer, abogado, además, del diario *Madrid*. Se las arregló muy bien. Por primera vez después de la guerra, unas tres mil personas pudieron reunirse en un lugar público, en este caso un hotel de la capital, e intervenir por micrófono para defender la necesidad de las libertades democráticas o para ponerla en duda. Ni un ministro del régimen asistió a la conferencia. Toda la oposición estaba presente. Los falangistas montaron en cólera y lanzaron una feroz campaña de Prensa contra aquel «intruso» que se permitía dar lecciones a la vieja España. Campaña tanto más fácil de realizar cuanto que los organizadores de la estancia de Jean-Jacques Servan-Schreiber — *Es-cráiber*, se decía en los medios políticos — resultaban ser, por azar, unos liberales salidos del Opus Dei. No hizo falta más para que se afirmase, erróneamente, que el director de *L'Express* era un hombre del Opus.

En cualquier otro país que no fuese la España sometida a las leyes de la dictadura, tal ambigüedad no habría podido producirse. Igual que la Iglesia, atravesada por corrientes contradictorias, el Opus Dei también tenía ya sus contestatarios. García-Trevijano y sus amigos del diario *Madrid* supieron sacar partido hábilmente de la presencia de Jean-Jacques Servan-Schreiber para atacar de frente al régimen reuniendo en torno de ellos a las principales corrientes de la oposición. Fraga Iribarne, preocupado por el papel que tendría que representar a la muerte del general Franco, juzgó preferible no oponerse a ello abiertamente. Gracias al favor de que gozaba el Opus Dei, Servan-Schreiber tuvo el privilegio de presidir, en un club privado que pertenecía a *la Obra*, un almuerzo de cien cubiertos. Fue memorable. Frente a mí estaba sentado el principal exportador de naran-

jas de la región de Valencia, falangista convencido, que no ocultaba su admiración por Franco. A mi derecha, Ramón Tamames, economista marxista, quien me confesó durante la comida que, hasta entonces, nunca había aceptado sentarse a la misma mesa con altos funcionarios del Gobierno. Como se había convenido, Jean-Jacques Servan-Schreiber pronunció, a continuación de García-Trevijano, unas palabras amables a la hora de los brindis. Pero, tal vez animado por la presencia del general Manuel Díez-Alegría, que estaba sentado junto a él, concluyó su discurso con una frase que provocó el escándalo. «Puesto que tengo el gran honor — dijo, en síntesis — de ver en esta mesa a uno de los mejores generales del Ejército español, aprovecho la ocasión para manifestarle mi agradecimiento y desear que el Ejército español restablezca algún día la democracia en España.» García-Trevijano, que había organizado la estancia del director de *L'Express* en Madrid, palideció de emoción.

El general Díez-Alegría, cortés y reservado, rostro de cera tras unas gafas de montura metálica, no había aún dado que hablar en el extranjero. Pero, muy cercano al ala contestataria del Opus Dei, ya afirmaba en privado que su deseo era ver «legalizadas las corrientes políticas». Su presencia en el almuerzo ofrecido en honor de Jean-Jacques Servan-Schreiber no había sido fortuita. «La Historia de España — afirmaba — demuestra que si es fácil instaurar la dictadura, puede ser muy difícil salir de ella.» Partidario de la liberalización dentro de los límites del orden institucional, el general Díez-Alegría iba a representar, entre bastidores, un considerable papel en los años siguientes.

Jean-Jacques Servan-Schreiber tuvo, al menos, el mérito de agitar los ánimos. En cuanto al diario *Madrid*, convertido por su tirada en el segundo periódico madrileño de la tarde, comenzó a chocar directamente con el régimen. Dos veces seguidas, en 1968, Fraga Iribarne, ministro de Información, lo había suspendido por dos meses. La segunda, porque Calvo Serer, a finales de mayo de 1968, había titulado su

editorial: «No a De Gaulle.» La censura había leído allí: «No a Franco: que se retire a tiempo.» Un año más tarde, *Madrid* tomó partido contra el nombramiento del príncipe Juan Carlos como futuro rey de España. De conflicto en conflicto, el periódico hubo de pagar más de un millón de pesetas de multas. Calvo Serer tomó el camino del exilio y se refugió en Francia. Más adelante, en julio de 1975, echaría las bases de la Junta Democrática junto a Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, y volvería a su país en mayo de 1976. García-Trevijano, que se había quedado en España, trató en vano de salvar al *Madrid*. El periódico quedó definitivamente prohibido en noviembre de 1971 y su edificio fue demolido. «En España se tiene tendencia a expresarse demasiado libremente», comentó Alfredo Sánchez Bella, entonces ministro de Información y Turismo y alto dignatario del Opus Dei. El día mismo en que el Gobierno suspendía *Madrid*, Maurice Schumann, ministro francés de Asuntos Exteriores, que acababa de ser recibido por el Caudillo, declaraba a los periodistas: «El general Franco ha hecho una profesión de fe de europeo.» Un redactor del *Madrid*, Sánchez Gijón, se levantó: «Acaban de cerrar mi periódico. A lo fascista. ¿Cree usted que así se puede construir Europa?» Schumann se abstuvo de responder.

EL HEREDERO DE FRANCO

Hundido en un sillón dorado, con el rostro semi-oculto por el gran crucifijo de plata colocado sobre la mesa de las Cortes, impassible, inmovilizado en el tiempo y en el espacio, el general Franco se dirige a los procuradores. Alternativamente autoritario, grandilocuente, glacial, despreciativo para con los «pobres de espíritu» que, ante la idea de la sucesión, conspiran ya en el interior del régimen, recuerda que la historia de España se reinicia con él. Con la voz turbada por la emoción y los ojos anegados de lágrimas, anuncia ahora, este martes 22 de julio de 1969, su decisión de hacer del príncipe Juan Carlos de Borbón el futuro rey de España después de que él muera. Y añade: «De ahora en adelante, todo está atado y bien atado.»

Después de treinta años de poder absoluto, el general Franco se veía obligado a forzar la legitimidad monárquica para crear un rey, al modo de Napoleón I. Pues, en definitiva, el nombramiento del príncipe Juan Carlos era un testimonio de frustración, acaso la primera de su carrera como Jefe de Estado. Incapaz de obtener la abdicación del heredero legítimo de la corona, don Juan de Borbón y Battenberg, padre del príncipe Juan Carlos, y forzado entretanto a actuar para salvaguardar su obra, el Caudillo no tenía otro recurso que el de encontrar un rey. «Creo necesario recordar —precisó en su discurso de veintitrés minutos ante las Cortes— que el reino que hemos establecido, con el asentimiento de la nación, no debe nada al pasado: nació de aquel acto decisivo del 18 de julio de 1936, un hecho histórico trascendente que no admite ni pactos ni condicionamien-

tos.» Instauración y no restauración. La víspera, los astronautas norteamericanos habían dado los primeros pasos en la Luna. El príncipe Juan Carlos tenía treinta y un años.

Un hombre había representado un decisivo papel para lograr que el Caudillo eligiese al nieto del último rey de España: el almirante Carrero Blanco. Fue él quien, mucho antes, había puesto de manifiesto los inconvenientes que podía reportar al régimen la restauración de la Monarquía en la persona del conde de Barcelona. Fue él, también, quien convenció al general Franco de la necesidad de no retrasar mucho más tiempo la elección de su sucesor. Y fue él, finalmente, quien se dedicó a seguir de muy cerca los actos y los gestos del joven príncipe.

Desde hacía años, con una meticulosa paciencia, el Caudillo había preparado a su elegido para la futura misión. Diversas entrevistas con el conde de Barcelona le permitieron puntualizar la educación del joven príncipe, nacido en el exilio, en la Roma fascista. Y le hizo pasar por las más importantes escuelas militares de España. Luego, cuando Juan Carlos contrajo matrimonio, en mayo de 1962, con la princesa Sofía, hermana del rey Constantino de Grecia, le ofreció el palacio rosado de La Zarzuela, en las proximidades de El Pardo, para que se instalase allí. Juan Carlos lo convirtió después en residencia real. Ya nadie dudaba que el príncipe, nieto del rey Alfonso XIII depuesto del trono en 1931 por la victoria de los republicanos en unas elecciones municipales, era el preferido del Jefe del Estado. Convicción confirmada por añadidura con el título de Príncipe de España que Franco le concedió, desdeñando el hecho de que, en España, los herederos de la Corona llevaron siempre el de Príncipe de Asturias.

Pero, una vez más, el general Franco sorprendió a todos por lo repentino de su decisión. Encerrado durante tres semanas en su cuarto de trabajo de El Pardo, sin apenas recibir visitas protocolarias, se sumergió en la soledad más completa con los legajos y expedientes que, a petición suya, tres hombres habían reunido: el almirante Carrero Blanco, entonces vice-

presidente del Gobierno; López Rodó, ministro del Plan de Desarrollo, y el general Juan Castañón, jefe de la Casa militar. Para convencer al Caudillo, que ya tenía 76 años, de la urgencia del problema disponían de un argumento de peso: poniendo sus esperanzas en la próxima desaparición de Franco y en el vacío que había de seguir a ésta, las principales fuerzas de la oposición, tanto en el exterior como en el interior del régimen, se habían ido agrupando silenciosamente, durante los últimos meses, alrededor del conde de Barcelona, exiliado en Portugal. Don Juan, partidario de una liberalización progresiva de la institución, había conseguido adeptos decisivos. Cuatro generales importantes le habían ofrecido, privadamente, su apoyo. Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista español, tampoco regateó el suyo. Como medida de precaución, muchas de estas conversaciones —según me confió por aquella época una personalidad socialista— fueron registradas en magnetófono. Para todos los españoles preocupados en hacer que el paso de la dictadura a la democracia se hiciese por vías pacíficas, a costa de no definirse en lo inmediato sobre la forma del sistema político, la monarquía con don Juan era el único medio legal de hacer que España evolucionase.

Pero el general Franco puso fin bruscamente a todas las especulaciones, montando lo que en los medios oficiales iba a llamarse «Operación Salomé», porque en cierto modo, había utilizado la Monarquía como antaño hizo Salomé con la cabeza de San Juan Bautista. En la mañana del sábado 12 de julio de 1969, Franco le pidió al general Castañón que convocase a Juan Carlos a El Pardo para el lunes a las 14 horas. Ese mismo día, el almirante Carrero Blanco convocó al presidente de las Cortes, Antonio Iturmendi, carlista convencido y uno de los más altos personajes del régimen. El mecanismo estaba en marcha. Cuatro días más tarde, el 16 de julio, a la misma hora en que don Juan recibía en su villa de Estoril, en las afueras de Lisboa, una carta manuscrita del general Franco informándole de su decisión, Carlos Arias, entonces alcalde de Madrid, almorzaba

en El Pardo. «Bueno — le preguntó el Caudillo —, ¿cuáles son los últimos chismes?» Arias, muy tranquilo, le contó que se hablaba de una próxima sesión plenaria de las Cortes a propósito de la sucesión. Él no lo creía, dijo, porque estaban en vísperas de las vacaciones de verano. «Imagínese — añadió —, eso no tendría ningún sentido.» Al llegar a su casa supo la noticia por un telegrama. Igual de sorprendido se sintió José Solís Ruiz, ministro de los Sindicatos y Secretario General del Movimiento, quien fue informado en el restaurante por un pliego llevado por un motorista. Pero tuvo más suerte que otros dos ministros, que se enteraron por los periodistas. Aquel día, en Madrid, sólo cuatro hombres a lo sumo estaban en el secreto del general Franco. La Operación Salomé fue una operación de estilo militar, ultrasecreta. Los jefes del Ejército, no participaron en ella. Apenas tres días antes del nombramiento del príncipe Juan Carlos, el diario católico *Ya* publicaba una caricatura a todas luces significativa: «No te preocupes, hombre — dice la mujer al marido, que está arrellanado en una butaca —; la única sorpresa posible es que te elijan como sucesor.» Consciente de su responsabilidad «ante Dios y ante la Historia», según su fórmula favorita, Franco no dejaba que hubiese ninguna duda sobre su elección. «La designación del príncipe Juan Carlos — declaró ante las Cortes — es totalmente conforme con el carácter de nuestra tradición, gloriosamente representada por los bravos combatientes que se opusieron durante un siglo a la decadencia liberal y a la disolución de nuestra patria por el marxismo.»

En el año 1947, con un texto sometido a referéndum — la Ley de Sucesión para la Jefatura del Estado — y aprobado por un 92,94 % de votos, el general Franco había establecido que el Estado español era una Monarquía, «católica, social y representativa», provisionalmente sin rey. Únicamente él, guardián del reino, tutor de la nación, tenía el poder de designar a su sucesor «a título de rey o de regente». Caudillo de la Cruzada, Generalísimo de las fuerzas armadas, jefe vitalicio del Movimiento nacional, el

general Franco se adjudicaba el derecho unilateral de decidir el porvenir de España. «La corona había caído al suelo — me dijo Fraga Iribarne —; y fue él quien la recogió y la pulió. Es lógico que elija su rey.» Evidentemente.

Fue el propio Fraga Iribarne, a la sazón ministro de Información y Turismo, quien tomó a su cargo la organización del referéndum de 1966. Acontecimiento importante, porque los electores españoles — veintidós millones, aproximadamente — fueron requeridos para que se pronunciasen sobre un cierto número de leyes que consolidaban definitivamente el andamiaje constitucional del régimen. Las principales concernían a las reglas de sucesión y a las atribuciones del Jefe del Estado y del presidente del Gobierno. Franco había tardado treinta años en definir en los textos las instituciones que pensaba legar a España después de su muerte. Las Leyes Fundamentales del Estado — es decir, la Constitución — tenían, por tanto, que ser minuciosamente preparadas. Y, cuando el príncipe Juan Carlos subiese al trono, serían esas Leyes las que permitirían que la derecha ilustrada, salida del régimen, pudiese entablar el diálogo con las fuerzas democráticas del país, dando por sentado que toda liberalización, para poder beneficiarse del apoyo de las Fuerzas Armadas, debería pasar obligatoriamente por las instituciones. Incluso los comunistas y socialistas, pese a sus reiteradas declaraciones a favor de la «ruptura», es decir, de la anulación pura y simple de las leyes franquistas, se verían forzados, en una primera etapa, a aceptar este principio con el fin de evitar la repetición de un nuevo drama. El de la guerra civil de 1936-1939 ya había causado medio millón de muertos.

«Todos me conocéis. Nunca he sido guiado por la ambición de poder...» El 2 de diciembre de 1966, 48 horas antes del referéndum, el general Franco dirigió una última llamada por televisión al pueblo para animarle a votar «sí». Y añadió, con un tono compungido: «Desde mi juventud, siempre he tenido que soportar responsabilidades demasiado pesadas para mi edad o para mi situación. Me habría gustado disfru-

tar de la vida como todos los demás españoles, pero el servicio de la patria ha acaparado todo mi tiempo y toda mi existencia.» Durante tres semanas, en los ministerios, secretarías, mecanógrafas, taquígrafas y ascensoristas habían llenado a mano cerca de 22 millones de papeletas de voto con la palabra «sí». Veinte pesetas a cada funcionario por cada mil papeletas llenas. Era una bonita suma. Así, cada elector recibió su voto ya cumplimentado. En principio, había que enviar un segundo voto, en blanco éste. Pero no siempre: el gobernador de Lugo, Eduardo del Río Iglesias, hizo que sólo se enviase la papeleta con el «sí». «Es — dijo él mismo — para facilitar las cosas.»

También para facilitar las cosas, el *slogan* «Sí a Franco, a la paz, al progreso» era repetido machaconamente cada diez minutos en la radio y cada hora en la televisión. Y millones de octavillas lanzadas desde aviones. Y altavoces instalados en camionetas que reiteraban el ensordecedor «sí» entre dos pasodobles. Y trescientos mil carteles con la foto del Generalísimo... «Todo para el sí, nada para el no», tal era la consigna oficial, seguida, evidentemente, por todos los mandos del régimen. Sin embargo, hubo algunas excepciones. Así, López Rodó, ministro del Desarrollo, recomendó, con su ambigüedad habitual, que se votase libremente, pero que se votase. Y Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, no tomó la palabra ni una sola vez durante la campaña electoral: consideraba que el Gobierno habría tenido que soltar lastre y autorizar que la oposición hiciese su campaña.

Pues bien, la oposición no tuvo derecho a la palabra. Unas setecientas personalidades — entre ellas el ex ministro de Educación Ruiz-Giménez, el profesor Tierno Galván y el autor dramático Alfonso Sastre — solicitaron autorización para hacer campaña a favor del «no». En vano. Fraga Iribarne, que, luego, como ministro de Gobernación del primer gobierno del rey Juan Carlos, se opondría a la existencia legal del Partido Comunista español y de los movimientos de extrema izquierda por considerarlos «totalitarios», se negó a ello formalmente. En la España franquista se

toleraban algunas escapadas al campo de la libertad, pero nada más. Sin medios de propaganda, sin periódicos, sin organizaciones legales, la oposición democrática no podía darse a conocer. Ni un cartel propugnaba el «no» o la abstención. Solamente algunas octavillas repartidas de noche por comandos clandestinos de jóvenes obreros y estudiantes. En cada ocasión, era como una cacería en las calles. La policía detenía a los «babosos», a los «traidores» para, por otra parte, ponerles en libertad unas horas más tarde. En el mejor de los casos, los manifiestos contra el «sí» circulaban bajo mano, como, por ejemplo, en el Café Gijón, lugar de reunión de los escritores, a doscientos metros del ministerio del Ejército.

Como se trataba del primer referéndum desde 1947, y sobre la Monarquía, yo no podía dejar de asistir a este acontecimiento. Sobre todo después de haber comprobado sobre el propio terreno las condiciones en que se había desarrollado la campaña electoral. Llega el 14 de diciembre... En un soleado Madrid, los microbuses llevan, en el parabrisas, unos letreros en rojo: «Viaje hoy gratis.» Los habitantes de la capital se aprovechan de ello y recorren la ciudad en todas las direcciones para visitar a sus parientes o amigos. En el Paseo de la Castellana y en el Paseo de Calvo Sotelo — avenidas gemelas cuya majestad es realizada por sus palmeras y sus jardines — los desocupados, en mangas de camisa, charlan en las terrazas de los cafés. Alrededor de la fuente de la Cibeles, cuyo carro tripulado por la diosa de la fecundidad evoca la época de Carlos III, déspota ilustrado del siglo XVIII, hay como un aire de fiesta. En las proximidades de la Plaza Mayor, que es en Madrid lo que la Plaza de los Vosgos es en París, los mesones y las tascas, esas tabernas típicamente españolas, rebosan de público. Y de ruido. El Gobierno no ha escatimado los medios para incitar a la población a salir y a desplazarse. Así, por ejemplo, cada empleado, cada trabajador tiene derecho a media jornada libre y pagada, pero con una condición: presentar luego el certificado de haber votado. Este certificado todavía les es más necesario a los funciona-

rios: si no pueden presentarlo, se dice, se les retendrá el tres por ciento de su sueldo... hasta las próximas elecciones. Y no hay a menudo elecciones en la España de Franco. Como me confían algunas buenas gentes que han ido a buscar su tarjeta de elector —hubo dos millones la semana precedente—: «queremos nuestro voto». Frente al Museo del Prado, uno de los más ricos del mundo, hay, este miércoles de diciembre de 1966, varios centenares de personas que se empujan para entrar. Les oigo discutir. «Soy español, caramba. ¿Por qué no había de votar?» También es día de fiesta para sor Francisca Quiroga, de la Orden de San Jerónimo, hermana del cardenal-arzobispo de Santiago de Compostela. Hace años que no ha salido de su convento. Y he aquí que ahora se encuentra en las calles de Madrid, atónita, aturdida por el sol, la circulación y los rascacielos, y por la multitud campechana que deambula. Nada menos que un día de fiesta. «Sólo por esto —dice— le daría veinte votos al general Franco.»

Fraga Iribarne está satisfecho: los resultados superan todo lo previsto. Cerca del 96 por ciento de los sufragios son favorables al «sí». Solamente 372.691 «noes» y 430.856 votos en blanco o nulos. A pesar de la consigna de la izquierda y de las Comisiones Obreras —principal organización semiclandestina de los trabajadores— en favor del boicot, el número de abstenciones no es superior al 12 %. Salvo en algunas ciudades, como Bilbao, centro industrial del País Vasco, donde oscila alrededor del 25 %. Probablemente, los sectores moderados del régimen hubieran preferido un porcentaje de «síes» menos masivo, algo que diese una imagen más democrática que poder presentar al resto de Europa. Pero, ¿qué otra cosa podía esperarse cuando el número de votantes, en algunas provincias de Andalucía y Castilla, ha superado el número de inscritos? Sin embargo, en los medios económicos y financieros de la Comunidad Económica Europea, en los Estados Unidos, en los sectores liberales de España, el referéndum de 1966 constituyó un viraje decisivo. Y abrió la esperanza en una liberalización progresiva del régimen. El ge-

neral Franco tenía ya 74 años. Para la burguesía, siempre temerosa del desorden y de la revolución, el establecimiento de unas estructuras constitucionales capaces de soportar el fenómeno de la sucesión fue como una boya de salvamento. Y para el Ejército, una necesidad. Ya en diciembre de 1965 el general De Gaulle había citado a la «nación española» entre los países de Europa que era necesario «incorporar». Incluso antes de pronunciarse sobre la democracia futura, el Occidente no se sintió descontento de ver descartada cualquier sorpresa de última hora. A falta de otra cosa mejor, el referéndum de 1966 fue aceptado. Y es que España, después del arreglo del problema de Berlín, había adquirido una considerable importancia estratégica.

En vida del general Franco, la separación de los poderes del Jefe del Estado y del Presidente del Gobierno, tal como estaba prevista en la Constitución, sólo tenía una importancia relativa. Mucho más interesantes eran los mecanismos propiamente dichos de la sucesión. Además del artículo 6, que daba al Caudillo el derecho de proponer «en cualquier momento» a las Cortes la persona que debería ser llamada «eventualmente» a sucederle a título de rey o de regente, el artículo 13 le garantizaba otro privilegio: el de «proponer a las Cortes, oído el Consejo del Reino, que queden excluidas de la sucesión las personas reales que no posean la capacidad requerida para gobernar o que, en razón de su desprecio notorio de los Principios Fundamentales del Estado o de sus actos, merezcan perder los derechos de sucesión establecidos por la ley».

El general Franco, procediendo por eliminaciones sucesivas, apartó primero de la sucesión al príncipe Carlos-Hugo de Borbón Parma, descendiente de Carlos IV, candidato al trono de España. En diciembre de 1968, interpelado en un hotel de Zaragoza donde residía con su esposa, la princesa Irene de Holanda, hija de la reina Juliana, fue conmovido a abandonar el territorio español en el término de veinticuatro horas. Razón invocada: la de haberse inmiscuido en los asuntos internos del país. El príncipe Carlos-

Hugo, heredero de la rama carlista, que fue separada del trono en la primera mitad del siglo XIX, tiene nacionalidad francesa y habla el español con acento extranjero. Sin embargo, fueron los cuarenta mil requetés carlistas de Navarra, tocados con sus boinas rojas, quienes formaron los batallones de choque del Ejército nacional. Para impedir, siguiendo los términos de la Constitución, que el hijo mayor del príncipe Carlos-Hugo tuviese alguna posibilidad de ceñir la Corona española, Franco prohibió incluso que la princesa Irene diese a luz en territorio español y, de ese modo, que pudiera tener la nacionalidad española. El niño Carlos Javier nació en Holanda en 1970. Yo asistí, por cierto, a su bautizo, tres semanas más tarde. Asombroso espectáculo. «¡Viva el Rey!» Bajo las banderas sangre y oro que engalanaban la vieja casa solariega de Lignières, propiedad de los Borbones, situada a cincuenta kilómetros de Bourges, un millar de españoles con boinas rojas aclamaron, aquel domingo de primavera, al recién nacido, envuelto en blancos pañales y que también fue cubierto con una boina roja por un fiel entusiasta. Aquellos carlistas, imposibilitados de reunirse en su tierra, habían venido, en autocar, en avión o en taxi, de todas las provincias de España. La gendarmería nacional vio con ojos benevolentes cómo pasaban por la orilla del Arnon gritando «¡Libertad!» y «¡Viva Cristo Rey!» Después, los carlistas se han integrado en las filas de la oposición y, alentados por el príncipe Carlos-Hugo, cordialmente recibido en Cuba y en la China popular en los años 70, afirman ser partidarios de un régimen socialista autogestionario. Algunos se han unido, en Navarra, a la organización revolucionaria E.T.A. Navarra, feudo tradicional de los carlistas, veía cómo, cada año, miles de ellos prestaban juramento de lealtad en Montejurra a su entonces pretendiente al trono de España.

Lo más difícil fue apartar definitivamente de la sucesión a don Juan, padre de Juan Carlos. Y conseguir que la operación fuese aceptada por el conjunto de fuerzas que habían sostenido el régimen hasta entonces, principalmente el Ejército. A pesar de sus nu-

meras declaraciones de fidelidad al Caudillo, desde el comienzo de la guerra civil, don Juan nunca renunció a su legitimidad ante el régimen. Su hermano Alfonso murió en 1938 sin dejar hijos, y su hermano Jaime, duque de Segovia, cuyo hijo mayor se había casado con la nieta del general Franco, renunció a sus derechos a la Corona porque era sordomudo de nacimiento. En consecuencia, nadie más que don Juan podía heredar los derechos dinásticos del rey Alfonso XIII. Consciente de sus títulos y de sus privilegios, prefirió vivir exiliado en Portugal. Su hijo, el príncipe Juan Carlos, que no obstante se había negado a subir al trono sin su consentimiento, declaró de pronto, en enero de 1969, que se sometería a las leyes y a su deber. Tenía treinta y un años. La decepción fue grande entre los partidarios de don Juan y la opinión pública se sintió desconcertada. «¿Cómo llegar a un acuerdo con él sobre un programa mínimo de apertura política y, eventualmente, de democratización, si obraba al margen de su propio padre?» Esta observación que me hizo entonces Pablo Castellanos, dirigente del sindicato socialista U.G.T., correspondía al estado de ánimo que predominaba en los medios de la oposición mejor dispuestos para entablar el diálogo. Entre los franquistas, naturalmente, la fidelidad al jefe, al Caudillo, se anteponía a cualquier otra consideración. Jaime Capmany, miembro influyente del Movimiento, procurador en Cortes, republicano de convicción y, desde hacía poco, director del diario *Arriba*, votó por el príncipe cuando Franco pidió a los 491 parlamentarios que ratificasen su decisión. Sólo diecinueve votaron en contra y nueve se abstuvieron. «Desde la guerra — me confió Capmany una noche que le visité en su periódico —, la España legal nunca ha sido tan ilógica. Los verdaderos monárquicos han votado contra Juan Carlos y los republicanos a favor.» Negado por los carlistas, por los legitimistas partidarios de don Juan, por los falangistas republicanos y, sobre todo, por el conjunto de la oposición, la izquierda en primer lugar, el príncipe Juan Carlos comenzaba con malos auspicios su carrera real. «Si quiere reinar — me hizo notar José

María de Areilza, conde de Motrico, que luego iba a ser su primer ministro de Asuntos Exteriores —, necesitará tener tres legitimidades: la de Franco, la de la Monarquía hereditaria y la del pueblo.»

Lo primero que aprendió el príncipe Juan Carlos fue a guardar silencio. Y a adquirir la seguridad que le faltaba. Hasta el asesinato de Carrero Blanco sólo recibió visitas protocolarias en su palacio de La Zarzuela, excepción hecha de los militares de su generación y de sus antiguos camaradas de Academia, con los cuales se reunía regularmente. Pero, sobre todo, dedicó la mayor parte de su tiempo a estudiar informes sobre España, entre dos viajes a provincias o al extranjero. Franco, por otra parte, nunca le invitó a asistir a los consejos de ministros que presidía ni se esforzó en tenerle regularmente informado de los asuntos de España. En noviembre de 1974, unos meses después de la primera enfermedad del Jefe del Estado, el príncipe Juan Carlos le confesaba a un periodista norteamericano: «Sinceramente: yo no sé lo que piensa el Caudillo; la verdad es que nunca he llegado a saberlo.»

Su margen de maniobra era estrecho. Tanto más estrecho cuanto que, entre bastidores del poder, se ponía en tela de juicio el porvenir del joven príncipe. Desde que María del Carmen, la nieta del Caudillo, contrajo matrimonio, en marzo de 1972, con don Alfonso de Borbón y Dampierre, nieto del último rey de España y primo hermano del príncipe Juan Carlos, no cesaban de murmurar sus allegados: «¿Por qué Alfonso no podría convertirse en rey o incluso en regente?» Se convenció a Franco para que concediese a don Alfonso el título de duque de Cádiz y el tratamiento de alteza real, distinción que está reservada, según el derecho dinástico español, a los hijos de rey. Finalmente, poco tiempo después, le fue ofrecido a la joven pareja un pabellón de los jardines de El Pardo, instalado a su gusto, para que se estableciesen en él. En los medios oficiales se decía que El Pardo podría quedar en propiedad de la familia a la muerte del Caudillo; incluso que existía un proyecto de ley listo para ser enviado a las Cortes en el momento

oportuno. Pero don Alfonso y María del Carmen acabaron por cambiar de domicilio: se instalaron en un apartamento de Madrid. En cuanto a doña Carmen, abandonó El Pardo unas semanas después de la muerte del Caudillo.

Las maniobras entre bastidores inquietaron por entonces hasta tal punto a los medios oficiales, que uno de los principales diarios de España, el *ABC*, de tendencia monárquica y más bien favorable a don Juan, consideró oportuno, en 1973, publicar un editorial sobre «la última incertidumbre»: la de la Constitución elaborada por Franco. En ella, efectivamente, no se decía nada de lo que debía ocurrir en caso de que el príncipe Juan Carlos desapareciese antes de subir al trono. Su hijo Felipe, nacido en 1968, no era obligatoriamente el heredero de la Corona. Y de todas maneras, aunque Franco se hubiese preocupado de precisarlo, el niño aún no tendría la edad para reinar. Legalmente, España se habría visto dirigida por un regente hasta que el niño llegase a la edad de treinta años, es decir, a la edad requerida por la Constitución para ser rey de España. Un plazo sobradamente amplio para desencadenar las intrigas y las pasiones.

El fallo del sistema era evidente. ¿Lo había decidido Franco intencionadamente? ¿Se había dejado convencer para que dejase una puerta discretamente entreabierta que permitiese, llegado el caso, a don Alfonso acceder al trono? «¿Imagina usted la escena? — me dijo un día el conde de Motrico, con una gran sonrisa —. ¿María del Carmen desayunando en El Pardo con su marido y su abuelo, hablando del porvenir del príncipe mientras revuelve el azúcar en su taza de café?» Para asegurar ese porvenir y hacer que no dependiese únicamente de la estabilidad del franquismo, Juan Carlos se esforzó entonces en desmarcarse de la familia Franco y en liberarse discretamente de la tutela de los «ultras», que gravitaban alrededor de don Alfonso y de su suegro el marqués de Villaverde. Cirujano de profesión, el primero que hizo en España un trasplante de corazón, irascible, ambicioso y hablador en exceso, el marqués había

dado pie a que innumerables anécdotas circularan a cuenta suya. Pero lo cierto es que tenía influencia en El Pardo. En este aspecto representó un papel determinante, en agosto de 1974, para convencer a Franco de que reasumiese las funciones de Jefe de Estado que había cedido interinamente al príncipe Juan Carlos durante su primera enfermedad.

A pesar de las declaraciones de buena voluntad de don Alfonso, las relaciones de Juan Carlos y de su primo hermano no son calurosas. Cierta día, en un restaurante de Madrid, los comensales se han reunido a la hora del almuerzo. Llegan Juan Carlos y doña Sofía. Todo el mundo se levanta para saludar a los príncipes. Don Alfonso, que está de espaldas a la puerta, finge no ver nada y permanece sentado. Entonces el príncipe se acerca a él, después de haber saludado a todos los comensales, y, poniéndole una mano en el hombro, comenta: «¡Qué cansado estás, Alfonso...!» Palabras agrídulces que caracterizan bien las relaciones familiares de El Pardo, donde el general Franco, debilitado por la edad, se hunde poco a poco en las intrigas de sus allegados.

El príncipe Juan Carlos, discreto por naturaleza, prudente en sus pasos políticos, evitó ser objeto de chismes y maledicencias que hubieran podido empañar su prestigio. Pero, prisionero del sistema, sólo supo dar de sí mismo la apagada imagen de la indiferencia. Ninguna pasión, ningún entusiasmo en torno a supersona. Durante los funerales del almirante Carrero Blanco desapareció en la multitud de personalidades. No existía. Y acaso por esto, porque tuvieron conciencia de ello y se inquietaron por el incierto porvenir, las fuerzas moderadas del régimen se pusieron en movimiento. Desde enero de 1974 establecieron unos discretos contactos con las fuerzas de la oposición, incluido el Partido Comunista de Santiago Carrillo. La pregunta era sencilla: ¿cómo asegurar la sucesión pacífica del general Franco? Reuniéndose los vencedores y los vencidos de la guerra civil alrededor de un hombre: don Juan, conde de Barcelona. Unos emisarios fueron a Portugal para

convencerle de que retornase a la política. Desde el nombramiento de su hijo en julio de 1969, había preferido guardar silencio. Pero en su villa, donde conservaba piadosamente el crucifijo de su padre Alfonso XIII, no había cesado ni un instante de recibir a sus partidarios más fieles.

Uno de ellos, aunque republicano de convicción, era Antonio García-Trevijano, que tendría después un papel decisivo en la constitución de la Junta Democrática. Le encontré casualmente, por aquellas fechas, en París, en los alrededores de la plaza Vendôme. Me interpeló en la calle. «El Rey — me anunció — llegará dentro de unos días. Viaje político.» El Rey, para los legitimistas, era don Juan, que entonces tenía sesenta años. Tras una rápida investigación en los medios españoles para saber las verdaderas intenciones del ilustre visitante, anunciaba yo en *L'Express* del 21 de enero de 1974 la «gira política» del conde de Barcelona por los países miembros del Mercado Común, con Francia como primera etapa del viaje. Y concluía con estas palabras: «Después de todo, cuando el príncipe Juan Carlos sea rey, ¿no podría entregar la corona a don Juan? Padre e hijo han hablado de ello, el 6 de enero, en Estoril. Precisamente el día de Reyes.» En España, esta información agitó al régimen y, por un instante, el Gobierno dudó en autorizar la venta de la revista. Pero, si se confirmaba el retorno político de don Juan, el hecho era de tal naturaleza que los dirigentes españoles no podían permanecer indiferentes. Emilio Romero publicó en su periódico un furibundo editorial contra las pretensiones de los legitimistas y puso en duda los proyectos del conde de Barcelona. Otros editorialistas le pisaron los talones. Don Juan, al recibir a los corresponsales de la Prensa madrileña y catalana en París, a donde había llegado la víspera con mucha discreción, respondió de forma evasiva a las preguntas que se le hicieron y se negó a hacer declaraciones oficiales. Algunos periódicos españoles hablaron entonces de un mentís a las afirmaciones publicadas en *L'Express*.

Sin embargo, aquel mismo lunes 21 de enero don Juan tiene a bien recibirme en el viejo hotel de la

calle Rivoli, el mismo que frecuentaba su padre a comienzos de siglo. Sobre la mesa de la habitación, la escribanía y la carpeta de cuero grabadas con las armas de Alfonso XIII. Invitado a una cacería, durante los días 19 y 20 de enero, en una finca de los alrededores de Melun, también ha podido, entre dos tiros de escopeta, charlar con algunos cazadores franceses muy próximos al poder, entre ellos Michel Poniatowski. «Si le habla usted en francés — me había prevenido su secretario privado —, llámele *Monseigneur*. Si lo hace en español, dígame, simplemente, *Señor*.»

Don Juan, complexión atlética bajo una chaqueta de pata de gallo, la nariz aguileña de los Borbones, sonriente y tranquilo, me recibe con esta frase: «Ha escrito usted un artículo muy oportuno.» Ambiguo, como todos los Borbones, evita prudentemente que su pensamiento quede demasiado preciso durante los cuarenta minutos que dura la entrevista. Partidario de las libertades democráticas, admite que ni Alfonso XIII ni la República tuvieron unas instituciones lo bastante fuertes para resistir al desorden. Propone, por tanto, una Monarquía presidencial, en la cual el jefe del Gobierno podría, eventualmente, ser elegido por sufragio universal. Pero no se compromete demasiado cuando le interrogo sobre los partidos políticos y los sindicatos democráticos de una España nueva: «Unos partidos como los que hay en Francia o en Italia — me responde dubitativamente — me parecen difícilmente concebibles en España. Pero se podría pensar en una fórmula a la inglesa, acaso sencillamente clubs, asociaciones, antes de llegar al estatuto de los partidos.» Para él, la solidez del sistema sólo se apoya en un hombre: el general Franco, de 81 años de edad. Cuando éste desaparezca, me dice, los moderados del régimen conseguirán una mayor influencia. Y se podrán hacer nuevas combinaciones para sacar a España del callejón sin salida político. Pero, cuando me asegura que en ningún momento ha renunciado a sus derechos a la Corona, le interrumpo: «Señor, ¿cómo concilia usted sus pretensiones al trono de España con las de su hijo?» Don Juan, que me autoriza a relatar el sentido general de la

entrevista, sin atribuirle declaraciones entrecomilladas que podrían ser comprometedoras, cruza las manos sobre sus rodillas y me responde textualmente: «Mi hijo no siente ninguna preocupación ante la idea de devolverme la corona una vez suba al trono.» Es la primera vez que el conde de Barcelona admite, ante un periodista, esta eventualidad. ¿Ha expresado hasta el fondo su pensamiento?

Poco importa. En todo caso, para comprometer definitivamente al príncipe con el régimen, o, dicho de otro modo, para neutralizar por adelantado toda operación con la «derecha civilizada», los franquistas más leales multiplicaron sus maniobras ante el Caudillo a partir del asesinato de Carrero Blanco. En la voz popular, el príncipe recibió entonces el sobrenombre de «el Breve».

LA DERECHA CIVILIZADA

«Siete preguntas al Lobo.» Durante los tres años que precedieron a la muerte del general Franco, *Hermano Lobo* que, desde su creación en 1972, se había convertido rápidamente en el principal semanario satírico de España, publicó bajo ese título una rúbrica cuyo personaje central era un lobo negro. A las seis primeras preguntas, todas ellas maliciosas, sobre la realidad española, el lobo respondía con un «Uuuuh», levantando hacia el cielo su boca entreabierta. A la séptima — siempre la misma — sobre el final de la censura en el cine, el lobo bajaba la cabeza y mascullaba entre sus colmillos: «El año que viene, si Dios quiere.»

Los españoles nunca han renunciado a su humor ácido, ni siquiera en las horas más sombrías. A finales de los años sesenta, una floración de caricaturistas hizo su aparición en la Prensa de Madrid y de Barcelona, y constituyó una especie de vanguardia contestataria que utilizó hábilmente los medios de comunicación social para denunciar el autoritarismo del régimen. Entre estos humoristas, uno de los más populares ha sido el catalán Jaume Perich. En su obra *Autopista, best-seller* de 1970, dio unas definiciones originales e inteligentes a una serie de vocablos de la lengua española. Ironizando sobre la «democracia orgánica», expresión empleada por los franquistas para dar un contorno moderno a las estructuras del Estado español, escribió estas palabras: «El término *democracia*, cuando se le añade alguna cosa, es como el *whisky* cuando se añade que es español.»

En vida del general Franco, era imposible publicar la más mínima caricatura o la menor anécdota

crítica que le aludiese. En contrapartida, abundaban los rumores y las anécdotas de salón, sobre todo las que se referían a su longevidad a toda prueba. Nunca había estado enfermo y, aunque en los últimos años de su existencia fue atacado por una enfermedad de Parkinson detenida, continuaba dando muestras de una vitalidad notable para un hombre de su edad. Solamente un leve accidente de caza produjo en su momento algunos comentarios de los periódicos sobre su estado de salud. En los círculos de la oposición se contaba, en broma, por ejemplo, que, al regreso de un viaje a Filipinas, su hija Carmen le había traído una tortuga, advirtiéndole: «Es un animal que sólo come lechuga y que vive cientos de años. —Lo malo de estos animalitos —respondía el general Franco, bamboleando la cabeza— es que se acaba cogiéndoles cariño y... luego, cuando se mueren, los echa uno de menos...» El hecho es que, por los años setenta, toda España comenzó a preguntarse si el Jefe del Estado llegaría a centenario. Sus abuelos y sus bisabuelos habían vivido más de noventa años, y una de sus abuelas había pasado de la centena. «En la familia —me confió su sobrino Nicolás Franco— decimos que somos como los osos de los Pirineos.» Su propio padre, cuya muerte anunciaron los periódicos cuando contaba más de noventa años, sobrevivió milagrosamente. «Durante veinticuatro horas —me contaba Nicolás Franco— fue como de mármol. Pulso: cero; encefalograma: cero.»

En la oposición se comenzaban a impacientar por esa resistencia del general Franco. En los círculos moderados, próximos al poder, también estaban inquietos. «¿Qué sucederá —se murmuraba— si resiste veinte años más? Como no tiene la menor intención de retirarse ni de hacer subir al trono al príncipe Juan Carlos mientras él viva, la situación se volverá inextricable.» Pregunta tanto más pertinente cuanto que el general Franco, ya octogenario, todavía era capaz de disparar quinientos tiros de escopeta al día durante sus partidas de caza. También era capaz de mantenerse en equilibrio en los ríos de Galicia, cuando pescaba salmones o truchas a unos cuantos

kilómetros de su residencia del Pazo de Meirás. Es cierto que se habían tallado dos piedras bajo el agua para que no lo perdiese en un descuido. Pero sería indecoroso burlarse de ello. Hay que reconocer que Franco era excepcional en su género. Excepcional e intratable al mismo tiempo. Durante largos años, fue Max Borrell, un español originario de la República Dominicana, quien organizó sus jornadas de pesca en Galicia y en Asturias. Cierta día, cuando el general Camilo Alonso Vega era ministro de Gobernación —y toda España temblaba ante él—, Franco le invitó, junto con otros amigos, a pescar salmones. Al final de la jornada, el Caudillo le preguntó a Max Borrell cuántos peces habían sido capturados.

—Veintiuno —respondió éste.

—¿Cómo veintiuno, si sólo tenemos dieciocho colocados sobre la mesa? —replicó Franco.

—Es que el general Alonso Vega, que tenía prisa, regresó a Madrid y se llevó los tres salmones que había pescado.

Franco, furioso, envió a dos motoristas tras la pista del ministro de Gobernación. Y éste, avergonzado, hubo de regresar con sus tres salmones en la mano y presentar llanamente sus excusas.

De pronto, el 9 de julio de 1974, el general Franco, que sufría de una flebitis en la pierna izquierda, ingresó en el hospital madrileño que lleva su nombre. Sorpresa general. Los periódicos no trataron de ocultar la importancia de la noticia y publicaron diariamente unos comunicados. Nueve días después, el equipo médico, dirigido por el marqués de Villaverde, yerno del Caudillo, proclamó su optimismo y afirmó: «El Jefe del Estado podrá salir de la clínica cuando quiera. Pero nosotros preferimos que todavía permanezca aquí unos días más.» Por precaución. Al día siguiente de este comunicado, que llenó de satisfacción a los partidarios del régimen, se le declaró una grave hemorragia. Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno, abandonó en dos ocasiones el Consejo de ministros para acudir a toda prisa a la cabecera del Jefe del Estado. El 19 de julio, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes

y del Consejo del Reino, obtuvo al fin la firma del decreto sobre interinidad que hacía del príncipe Juan Carlos, en virtud del artículo 11 de la Ley de Sucesión, el sustituto del Caudillo al frente de España. Un acontecimiento. Era la primera vez que el general Franco cedía sus poderes por un lapso de tiempo indeterminado. Emilio Romero, director de *Pueblo y ducho* en los sutiles juegos de la política, fue el primero que hizo sonar el timbre de alarma. «La interinidad — escribió en sustancia — puede comprometer gravemente el porvenir del príncipe, antes, incluso, de que ascienda al trono de España.» Según me confió un alto funcionario español, el general Franco había perdido la víspera «dos litros y medio de sangre» a consecuencia de una hemorragia interna.

El martes 23 de julio, el doctor Manuel Hidalgo, director del hospital, declaraba categóricamente: «El Caudillo está completamente restablecido y, cuando lo desee, podrá reanudar sus actividades.» Aquella misma noche me entrevisté con el R. P. Martín Paltino, vicario general de Madrid. «Monseñor Tarancón fue ayer a ver al Jefe del Estado — me dijo —. Yo le acompañé. Cuando entramos en la habitación, el general Franco estaba sentado en la cama, con el torso desnudo. En plena forma.» «Empiezo a creer que soy inmortal», le dijo a monseñor Tarancón. Veinticuatro horas antes, cuando toda España le creía a las puertas de la muerte, Franco había pedido un aparato de televisión. El diario *ABC* incluso había publicado su foto, en pijama, platicando alegremente con Arias Navarro, que tampoco mostraba la menor preocupación. «Un fenómeno», comentaban los españoles, que no podían evitar su admiración por el anciano.

¿Por qué Franco, «completamente restablecido» desde el 23 de julio, no dejó en seguida el hospital para pasar sus vacaciones de verano habituales en el Pazo de Meirás, en las verdes colinas de Galicia? Y, sobre todo, ¿por qué no dio por concluido el poder interino del príncipe Juan Carlos? En Madrid, entonces invadido por los turistas veraniegos en *short* y minifalda, los rumores corrieron rápidamente.

te. España no se había sobresaltado al saber que el Caudillo cedía interinamente su título de Jefe de Estado, y se preparó para ver con calma la desaparición del hombre que acababa de celebrar el 38.º aniversario del alzamiento contra la República; pero ahora volvía a sentirse inquieta. Porque todavía no había nada decidido. El propio príncipe Juan Carlos tenía conciencia de ello. Educado por el Caudillo, a quien admiraba, conocía perfectamente la situación de su país. Prudente, taciturno, grave, nunca hasta entonces había hecho declaraciones que pudiesen comprometerle definitivamente para el futuro. La única que de él se conocía era ésta: «Soy europeo y creo que España debe integrarse a Europa.» Palabras insuficientes para los que, en España, esperaban del futuro rey la transición pacífica de la dictadura a la democracia. «¿Qué otra cosa podemos hacer?», me dijo por aquella época un militante del Partido Socialista Obrero Español, que luego añadió: «Tenemos que conceder al príncipe, obligadamente, un margen de confianza hasta que suba al trono...» Por su discreción, por sus silencios, por la ambigüedad de sus declaraciones y por su cuidado de permanecer un poco en la sombra durante las ceremonias oficiales, ni demasiado cerca de las personalidades de extrema derecha, ni demasiado cerca del Caudillo, ni demasiado cerca, tampoco, de los elementos partidarios de la apertura, el príncipe Juan Carlos continuó manteniendo el misterio a su alrededor. «Lo que es cierto — me hizo notar por entonces Leopoldo Torres, abogado de tendencia socialista, secretario general de la Asociación Internacional de juristas católicos — es que hasta ahora ha evitado hacer declaraciones de estilo fascista.» Las que esperaban de él todos aquellos que consideraban que la guerra no había terminado. Pero, en cinco años, el Príncipe había aprendido a desconfiar de los demonios que le rodeaban. Sabía por su padre, don Juan, heredero legítimo de la Corona, que ya no tenía nada que temer. «Es un flojo», me dijo uno de sus partidarios que, un mes antes, todavía esperaba de él una declaración estrepitosa para reafirmar sus derechos a la

Corona y prometer una apertura democrática. El príncipe Juan Carlos sabía que no tenía por qué temer de todos los que, desde dentro y desde fuera del régimen franquista, esperaban hacia tiempo que tomase opciones definitivas. Mientras Franco viviese... La derecha se complacía en pensar que su sucesor, una vez en el trono, sabría salvaguardar el franquismo puro y duro. Y la oposición liberal se atrevía a creer que el príncipe sería lo bastante inteligente para abrir España, desde el comienzo de su reinado, a las libertades democráticas.

Cuando el súbito restablecimiento de Franco, autorizado el martes 30 de julio a dejar el hospital para tomarse unas semanas de descanso y convalecencia, planteó un problema inesperado — el de saber si el príncipe Juan Carlos iba a continuar como Jefe de Estado interino —, la izquierda aprovechó la situación creada por la dualidad del poder ejecutivo para anunciar la constitución de la Junta Democrática. Acontecimiento capital, pues ya prefiguraba la concentración de las fuerzas antifranquistas con miras a precipitar el fin de la dictadura. Convocados en París, en los salones dorados del Hotel Intercontinental, una cincuentena de periodistas entrevistaron a los dos principales dirigentes de la Junta, ambos forzados a vivir en el exilio: Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, y Rafael Calvo Serer, miembro del Opus Dei, antiguo consejero de don Juan, conde de Barcelona. «Nosotros no creemos en la evolución del régimen hacia la democracia — vinieron a decir —. Sólo la ruptura democrática, es decir, la liquidación de todas las estructuras del Estado creado por Franco, permitirá el restablecimiento de las libertades en nuestro país.» Y propusieron, para un período intermedio, la organización de un gobierno provisional y la formación de una Asamblea constituyente, precisando que era el pueblo español el que debía escoger libremente entre la Monarquía y la República.

Los adversarios del Partido Comunista se apresuraron a subrayar que Santiago Carrillo había dado una prueba de su debilidad al aceptar a un aliado

tan poco representativo como Calvo Serer. Error de análisis. Se podía admitir que el antiguo propietario del *Madrid*, de tendencias monárquicas y en otro tiempo uno de los más fervientes partidarios del general Franco, tenía necesidad de hallar un aliado sólido para iniciar una operación política de esta envergadura. Pero, ¿era posible imaginar que uno de los más hábiles dirigentes de los partidos comunistas occidentales se prestara gratuitamente a tal maniobra? Santiago Carrillo, muy bien informado sobre las realidades del país, sabía perfectamente que Calvo Serer, bajo su apariencia de político caído en desgracia, tenía tras él unos importantes grupos industriales y bancarios, representativos de la burguesía española, y disponía, además, del apoyo de sectores católicos, carlistas y socialistas. La formación de la Junta Democrática no fue fruto del azar: ofrecía al Partido Comunista una ventaja considerable para el momento en que el general Franco presentase los primeros síntomas de debilidad física. Dos meses antes, el conde de Barcelona se habría comprometido, durante una reunión en Montecarlo con diferentes personalidades de la oposición, a apoyar a la Junta Democrática. Pero a última hora decidió abstenerse. Tal vez esto explicaba por qué Santiago Carrillo hubo de contentarse, *in extremis*, con figurar al lado de Calvo Serer...

Tuve conocimiento del anteproyecto del manifiesto de la Junta Democrática el lunes 22 de julio, en Madrid; o sea, aproximadamente una semana antes de la conferencia de Prensa. Como tenía por costumbre con los hombres políticos que frecuentaba, me había citado aquel día con Antonio García-Trevijano, uno de los abogados más controvertidos de la capital. «Siempre he sido republicano — me dijo, al recibirme en su despacho —, pero creo que la Monarquía permitirá, en una primera etapa, el paso de la dictadura a la democracia sin obstáculos. Hoy estoy convencido de que las leyes fundamentales bloquean toda posibilidad de evolución y de que el conde de Barcelona es incapaz de tomar una determinación decisiva. Yo soy un hombre independiente: la única

forma de desbloquear la situación es reunir a todas las fuerzas democráticas del país, incluido el Partido Comunista. Antes de pensar en el régimen que algún día elegirán los españoles libremente, hay que ponerse primero de acuerdo, sobre una plataforma común, para derribar la dictadura.» Y García-Trevijano me tendió entonces un texto de siete folios escritos a máquina y me rogó que lo leyera atentamente. «El documento es explosivo — me advirtió —. ¿Quién lo suscribirá? Es una declaración de guerra contra el régimen.» Antes de que le respondiese, me preguntó si no tenía alguna observación que hacer sobre la redacción propiamente dicha. Entonces le llamé la atención sobre el deseo «unánime» de cambio en España, haciéndole notar que el adjetivo «profundo» me parecía más conforme con la realidad. Y de igual modo hice con otros adjetivos. «Dentro de unos días — declaró él en aquel momento — Calvo Serer y Santiago Carrillo leerán este texto en París, en una conferencia de Prensa, para anunciar la constitución de la Junta Democrática. Sería preferible no hablar, por ahora, de ello.» Como yo sabía de tiempo atrás las numerosas relaciones políticas de García-Trevijano, tanto en el interior como en el exterior del régimen, y su afán, bajo apariencias quijotescas, de interpretar un papel eficaz, inicié una controversia sobre el texto en cuestión. Él insistió en el párrafo nueve, cuyo contenido, relativamente moderado, concernía a las reivindicaciones autonomistas de Cataluña y el País Vasco. «Estamos obligados — me explicó —, si queremos contar con el apoyo de los sectores moderados del Ejército, a no recargar inútilmente este problema. “Más vale una España roja que una España rota”, dijo en vísperas de la guerra, Calvo Sotelo, un hombre de la derecha. Esta frase sigue siendo válida: las Fuerzas Armadas no aceptarán nunca la democracia si ésta puede afectar a la integridad territorial de la Nación.»

No se trataba de una observación sin importancia. El rey Juan Carlos, en su primer discurso, proclamó su voluntad de defender la totalidad del territorio nacional, incluyendo la recuperación de Gibralt-

tar. Y su primer viaje fuera de las fronteras fue el que hizo a África para rendir homenaje al Ejército, entonces encargado de proteger el Sahara. Asimismo, la política del Partido Comunista, durante los años que precedieron a la muerte del general Franco, consistió en echar *confetti* a los militares. Más concretamente: en hacerles comprender que la izquierda, incluso la marxista, no les consideraba a todos como lacayos del franquismo. Porque lo mismo Juan Carlos que Santiago Carrillo comprendían muy bien que, en el período del postfranquismo, no se podría hacer nada sin contar con el Ejército. Tanto para los comunistas como para los jóvenes oficiales españoles, era evidente que el orden, la independencia nacional y su aversión a las fortunas excesivas eran inatacables. En cuanto al sucesor designado por Franco, tuvo buen cuidado de mantener unas relaciones continuadas con los capitanes, especialmente con sus camaradas de promoción, a los que abría cada semana las puertas de la Zarzuela.

Jefe de Estado interino durante cuarenta y cinco días, hasta el 2 de septiembre de 1974, el príncipe Juan Carlos descubrió rápidamente los límites de su poder. Mientras que el Caudillo reposaba en su propiedad del Pazo de Meirás y continuaba recibiendo a altas personalidades políticas, él tuvo que conformarse con interpretar un papel de figurante. Le era imposible iniciar las reformas que, según aseguraba en privado, deseaba emprender. Su máximo interés, por lo tanto, era el de que el general Franco reasumiese cuanto antes sus funciones para que no se deteriorase la imagen que él trataba de ofrecer a la opinión pública. El único decreto importante que firmó cuando presidió excepcionalmente el Consejo de ministros, fue el del 9 de agosto de 1974, que reforzaba de un modo considerable el poder de los grandes bancos — Banco Central, Banco Español de Crédito y Banco Hispanoamericano — en detrimento de las pequeñas empresas bancarias y de todas las que unos hombres de nueva mentalidad, pertenecientes a la «generación frustrada», se proponían abrir, especialmente en Cataluña. Este decreto, que pasó inadvertido para la

Antes que escribir sobre la historia de la España contemporánea, Édouard Bailby se ha propuesto con este libro poner de manifiesto las referencias del pasado inmediato que inciden a su juicio en su presente y su futuro próximo. Bailby se halla en inmejorables condiciones para llevar a cabo ese propósito con eficacia. Como enviado especial del prestigioso semanario francés *L'Express*, ha visitado asiduamente España desde hace más de doce años. Ha vivido acontecimientos tan importantes como el proceso de Burgos, el proceso 1.001, el atentado contra Carrero, el último congreso celebrado por el PSOE en el exilio —el Congreso de Suresnes—, la muerte de Franco, el advenimiento de Juan Carlos al trono, y otros muchos. Ha mantenido entrevistas con personalidades tan diversas como López Rodó, Fraga Iribarne, Areilza, Nicolás Franco, Tierno Galván, Felipe González, Marcelino Camacho, dignatarios de la Iglesia, banqueros catalanes, mineros asturianos, revolucionarios vascos; es decir, hombres y personalidades de medios muy diferentes y con frecuencia contrapuestos. Con este material, enriquecido con significativas anécdotas, Bailby aporta su testimonio, el de un periodista francés que, al hilo de sus experiencias personales y profesionales, ha tratado de comprender España y su entramado político.

Dos tercios de los españoles actuales no han vivido la guerra civil. Los resultados del último referéndum conducen hacia la democracia. Que el paso hacia ella se produzca sin traumas, sin tropiezos insuperables, es un desafío general, un formidable reto cuyos términos y cuyos elementos de análisis se encuentran en ese pasado inmediato que Bailby ha sabido poner lúcidamente de manifiesto.

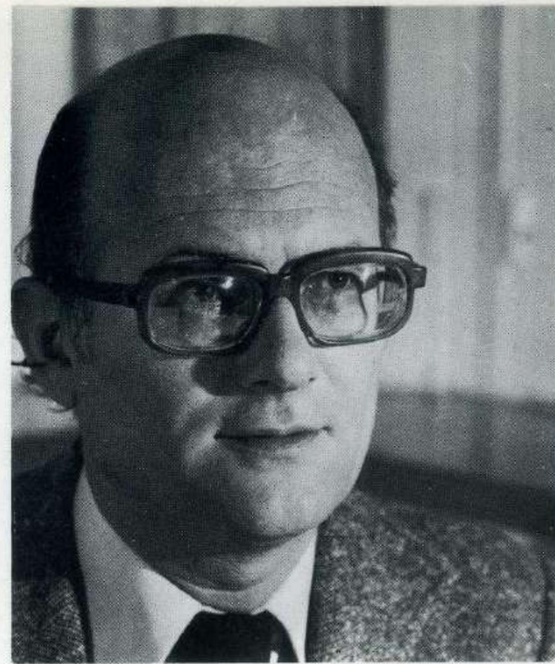


Foto Jacques Robert

Édouard Bailby nació en junio de 1929. A los diecinueve años obtuvo una beca y marchó a Brasil, donde permaneció por espacio de quince años. Colaboró en numerosos periódicos de São Paulo y Rio de Janeiro, y escribió tres obras sobre temas de política en portugués. A partir de 1964 pasa a trabajar en L'Express, donde está especialmente encargado de las secciones ibérica y latinoamericana. En 1966 asistió a la celebración del referéndum; más tarde fue de los primeros en conocer la gestación de la Junta Democrática; en julio de 1975, en Argentina, durante el mandato de Isabel Martínez de Perón, fue encarcelado y su liberación se consiguió gracias a la enérgica intervención del presidente francés Giscard d'Estaing y de la prensa internacional.